



**Convención Internacional
sobre la Eliminación de
todas las Formas de
Discriminación Racial**

Distr.
GENERAL

CERD/C/SR.1321
17 de marzo de 1999

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

54º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1321ª SESIÓN

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el jueves 11 de marzo de 1999, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. ABOUL-NASR
más tarde: Sr. DIACONU

SUMARIO

PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, EN PARTICULAR MEDIDAS DE ALERTA TEMPRANA
Y PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA (continuación)

República Checa (continuación)

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS
PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)

Costa Rica

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas.

PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, EN PARTICULAR MEDIDAS DE ALERTA TEMPRANA Y PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA (tema 3 del programa) (continuación)

República Checa (continuación) (CERD/C/348)

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de la República Checa vuelven a ocupar sus puestos a la mesa del Comité.

2. El Sr. UHL (República Checa), respondiendo primeramente a un comentario hecho por el Sr. Rechetov, dice que está de acuerdo en que el Gobierno de la República Checa tiene la responsabilidad por las acciones de las autoridades locales. Respecto de la pregunta sobre la llegada de los diversos grupos a la República Checa, dice que los romaníes se asentaron en el siglo XIV ó XV. Los que viven en Bohemia y Moravia fueron víctimas de genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra había 7.000 romaníes y sólo quedaron 500. Después de la guerra, los que han vivido en territorio de la República Checa han estado en general en mejor situación que los que viven en otros lugares. Antes de 1945 había más romaníes en las partes del país habitadas anteriormente por los alemanes. En lo que respecta a los barrios de Usti nad Labem donde viven los romaníes, los que han venido de Eslovaquia se consideran extranjeros: antes de la división de Checoslovaquia en 1992, muchos romaníes vivían en la parte eslovaca y han tenido dificultades para adquirir la ciudadanía checa. Hace sólo tres semanas que el Gobierno de la República Checa decidió derogar una ley que resultó relativamente insatisfactoria e introducir una nueva legislación que actualmente examina el Parlamento. Tan pronto se apruebe esa legislación esas personas adquirirán automáticamente la ciudadanía checa sin ningún trámite burocrático complicado. El Gobierno de la República Checa tiene intenciones de ayudar a las personas que han llegado después de la disolución de Checoslovaquia a obtener la ciudadanía o al menos un permiso de residencia permanente.

3. Volviendo al texto de la decisión 2 (53), según tiene entendido no hay otros lugares en la República Checa donde haya intenciones de construir ese muro o cerca. Hay muchos lugares donde existen barrios residenciales como éstos que a veces son construidos por los gobiernos municipales para ofrecer viviendas a personas de bajos ingresos que no pueden pagar los alquileres que se piden en otros lugares. Según la ley nadie puede ser desalojado y quedar simplemente sin hogar, por lo que el gobierno municipal tiene la obligación de ofrecer alojamiento modesto y decente en el que tal vez haya que compartir servicios sanitarios, pero que cuenta con agua corriente, calefacción, etc. Este es un problema social que no afecta a los romaníes. Los romaníes se han concentrado por voluntad propia en determinados lugares. Los sucesivos gobiernos de la República Checa han reconocido que sigue habiendo discriminación contra los romaníes y han adoptado medidas para luchar contra ella. Casi toda esa discriminación se manifiesta en el sector privado donde el Estado no siempre tiene facultades para adoptar medidas.

4. El Gobierno ha dado al orador instrucciones de elaborar un plan de acción para promover la integración de los romaníes en la sociedad checa. El plan, elaborado con ayuda de un grupo integrado por decenas de especialistas, se presentará a consideración del Gobierno el 31 de marzo para su aprobación. El Primer Ministro también le ha pedido que elabore un proyecto de decreto sobre la adopción de medidas para combatir a los cabezas rapadas.

5. Es importante realizar la labor de prevención en las escuelas de manera de asegurar que la joven generación no haga suya una ideología racista y violenta. Tal vez al Comité le interese saber que el orador ha preparado un programa de cinco puntos extraídos de la recomendación del Comité acerca de la necesidad de llevar a cabo cursos de capacitación para jueces e introducir en las escuelas enseñanzas para luchar contra la xenofobia y promover la tolerancia.

6. El 11 de enero, el Gobierno de la República Checa aprobó un plan para realizar una campaña de lucha contra el racismo y alentar la tolerancia, cuya aplicación se está preparando actualmente en los medios de información y las escuelas. Los maestros, las personalidades religiosas y los jefes de los grupos de exploradores han sido invitados a participar en esta campaña. La enseñanza de la igualdad racial y étnica tiene que comenzar desde la escuela primaria. Se han organizado cursos de verano sobre tolerancia para los maestros de enseñanza primaria. El entrenamiento de los oficiales de policía comprende cursos de prevención de la xenofobia y promoción del respeto de los derechos humanos.

7. Respondiendo a preguntas formuladas por el Sr. de Gouttes y el Sr. Garvalov sobre las razones que asisten al Gobierno de la República Checa para no haber revocado aún la decisión de la autoridad local de Usti nad Labem, el orador señala que la cerca que se construirá en la calle Maticní separará dos bloques de viviendas y que se ha de construir un camino de acceso separado hacia la calle principal. La cerca se va a construir exclusivamente debido al ruido que hacen los niños que suman más de 50, cuando juegan frente a las cuatro viviendas unifamiliares habitadas por residentes no romaníes. Esas cuatro familias no se consideran racistas; simplemente están en contra del ruido. La explicación dada por el gobierno municipal es que en todo caso había sido una mala idea hacinar a tantas personas en viviendas residenciales, pero que la decisión era una medida de bienestar social y no había sido motivada por sentimiento racista alguno; tampoco tenía nada que ver con el racismo el plan de construir la cerca. Él, personalmente, estaba convencido de que, a la larga, el gobierno municipal decidiría no construir la cerca. A propósito, la propia decisión 2 (53) del Comité es poco clara, debido a que en la versión inglesa se habla de "segregación" mientras que en la versión francesa se habla de "aislamiento", lo que sugiere que incluso el Comité no está totalmente seguro de si se trata de una cuestión de segregación.

8. Respecto de la cuestión del Sr. de Gouttes acerca de la actitud de la población local, los miembros de las cuatro viviendas unifamiliares no pidieron que se construyera la cerca sino un muro de cuatro metros de alto. Vuelve a decir que muy pocas personas de la población total de la ciudad de Usti nad Labem desean que los gitanos se vayan y que están complacidos por el plan de construir la cerca. Un número igual de personas considera que hay riesgo de racismo, aunque a la inmensa mayoría le daba igual.

9. En respuesta a la pregunta del Sr. Sherifis acerca de lo que el Gobierno de la República Checa está haciendo para prevenir casos semejantes en otros lugares, el orador dice que los proyectos del Gobierno a los que se acaba de hacer referencia ayudarían a prevenir su reiteración. El Gobierno de la República Checa desea que la población romaní se sienta como en casa. El plan de acción mencionado es la mejor manera de alcanzar el objetivo de la integración y no la asimilación. Se trata de un empeño valiente porque muchas personas desean que los grupos minoritarios abandonen su cultura y su idioma. Es importante que los romaníes se sientan orgullosos de sus orígenes y aporten su contribución a la sociedad checa.

10. A su juicio, la Convención no ha recibido la suficiente divulgación. Claro está que se ha publicado en la Gaceta Oficial, y también el Ministerio del Interior la ha publicado para la policía. El informe del país y las conclusiones finales del Comité se pueden consultar en Internet y también han recibido amplia divulgación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. El orador personalmente ha puesto esos documentos a disposición del Departamento de Comercio de la República Checa que está realizando esfuerzos para impedir que ciertas tiendas, restaurantes y discotecas discriminen contra los romaníes. Donde quiera que se ha encontrado un aviso que prohíba a los romaníes la entrada, el Gobierno ha impuesto la ley, aunque hablando en sentido jurídico la cuestión es compleja. Tal vez haya que adoptar medidas más eficaces para ayudar a combatir este fenómeno en los tribunales.

11. Para concluir el orador dice que es difícil examinar la cuestión planteada sin tener presente el contexto social.

12. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro del Comité, dice que considera poco convincente el análisis que acaba de escuchar. El representante checo ha reconocido que existen problemas y ha dicho que se llevará esos casos a los tribunales. Sin embargo, si esas personas no tienen siquiera para pagar el alquiler es difícil imaginar cómo van a pagar los honorarios de un abogado. La carga no debería pesar sobre los hombros de las víctimas que presentan esas denuncias. Si el Gobierno tiene conocimiento de que están ocurriendo esos incidentes, y las observaciones del representante checo así lo sugieren, tiene el deber de adoptar medidas inmediatas para ponerles fin y castigar a los responsables. Las viviendas residenciales se han construido concretamente para los romaníes porque, aunque es evidente de que no están en condiciones de poder pagar el alquiler, el hecho real es que de 70 a 80% de los que viven allí son romaníes. El Gobierno de la República Checa debe hacer que todo el peso de la Convención se haga sentir impidiendo que se construya la cerca. El orador considera difícil creer que los niños romaníes son los únicos que hacen ruido cuando juegan al aire libre.

13. El Comité no quedará satisfecho a menos que el plan de construir la cerca quede inmediatamente cancelado y espera que en el próximo informe se explique que efectivamente se ha revocado la orden del Estado de conformidad con la Convención. Esta cuestión es evidentemente un problema racial y tiene que tratarse como tal.

14. El Sr. DIACONU dice que el diálogo del Comité con la delegación ha sido productivo y se ha orientado a la adopción de medidas prácticas. Toma nota de la intención del Gobierno de acatar las disposiciones de la Convención y adoptar medidas para favorecer a la minoría romaní desprotegida. Desea que las autoridades checas tengan todo género de éxito en la ejecución de su plan.

15. El Sr. UHL (República Checa) dice que su intención al comparecer ante el Comité no ha sido defender el muro o la cerca sino explicar las medidas que el Gobierno ha adoptado para echar abajo las barreras, promover la tolerancia y erradicar la xenofobia. Las autoridades han adoptado un criterio cauteloso debido a que están convencidas de que este método a la larga resultará más eficaz para eliminar la discriminación racial, según se define en el artículo 1 de la Convención. El apoyo constante y la crítica constructiva del Comité ayudarán a las autoridades checas en sus esfuerzos para alertar a la opinión pública en general acerca de los peligros inherentes en las actitudes racistas.

16. La delegación de la República Checa se retira.

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (tema 4 del programa) (continuación)

Informes periódicos 12º, 13º, 14º y 15º de Costa Rica (CERD/C/338/Add.4)

17. Por invitación del Presidente, el Sr. Díaz-Paniagua, el Sr. Guillermet y el Sr. Penrod (Costa Rica) toma asiento a la mesa del Comité.

18. El Sr. DÍAZ-PANIAGUA (Costa Rica), al presentar y actualizar el informe de su país, dice que el Gobierno de Costa Rica saluda la oportunidad de entablar un diálogo constructivo con el Comité con el fin de evaluar objetivamente las políticas y medidas nacionales dirigidas a eliminar la discriminación racial y a proteger a los grupos más vulnerables de Costa Rica.

19. El crecimiento económico sostenido de Costa Rica en los últimos años ha surtido efectos sociales positivos. El desempleo urbano disminuyó en 5,4% en 1998. Costa Rica pertenece al grupo de Estados que registra una tasa elevada de desarrollo humano y que figura entre los pocos países en desarrollo con más alto nivel de alfabetización y esperanza de vida.

20. Cerca del 95% de la población de Costa Rica descende de familias mixtas de españoles y aborígenes, con aportes posteriores de poblaciones africanas y asiáticas. Un 3% de la población, o sea unas 100.000 personas, son afrocostarricenses, 1% es población indígena y otro 1% es de origen chino. Estas cifras son necesariamente aproximadas ya que, lamentablemente, desde 1950 no se recopila información sobre la pertenencia étnica en los censos y estadísticas nacionales. El Gobierno es plenamente consciente de las directrices del Comité; sin embargo un desglose estadístico en categorías raciales se considera incompatible con los preceptos constitucionales de igualdad en una sociedad donde la mayor parte de la población tiene ancestros mestizos o mulatos.

21. Costa Rica tradicionalmente tiene sus puertas abiertas a las víctimas de catástrofes naturales, guerras civiles y dificultades económicas en los países vecinos y recientemente abrió sus puertas a un gran número de nicaragüenses. Los nicaragüenses con residencia legal representan 56% de la población total de extranjeros residentes en el país; estimaciones extraoficiales calculan el total de nicaragüenses con residencia legal o sin documentación en más de medio millón. Cabe esperar que muchos de ellos normalicen su situación legal migratoria acogiéndose a una amnistía de seis decretada a raíz del Huracán Mitch para que puedan tener los mismos derechos de los costarricenses en cuanto a garantías y obligaciones. Al 8 de marzo de 1999 se habían recibido 42.353 solicitudes y se calcula que a fines del período de amnistía se habrán inscrito unos 300.000 centroamericanos.

22. En el artículo 33 de la Constitución de 1949 se estipula que todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. En virtud del artículo 7 de la Constitución, la Convención tiene fuerza y rango jurídico superior a las leyes internas. De tal suerte, cualquier ley o práctica que se le oponga queda automáticamente derogada. Cualquier norma o medida práctica adoptada posteriormente que sea contraria a lo dispuesto en la Convención es absolutamente nula y podrá impugnarse sobre la

base de la inconstitucionalidad. Las víctimas de violación de lo dispuesto en la Convención pueden interponer recursos judiciales y administrativos para lograr la reparación, por ejemplo interponiendo recursos de amparo ante una sala especializada de la Corte Suprema.

23. El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los pueblos indígenas y tribales en países independientes también tiene el mismo rango supralegal, y la Sala Constitucional, perteneciente a la Corte Suprema, decidió en junio de 1998 que algunas de sus disposiciones tenían precedencia sobre los derechos y garantías que reconoce la Carta Fundamental a favor de los indígenas.

24. Costa Rica reconoce la necesidad de aplicar la legislación para garantizar el pleno cumplimiento de la Convención y ha adoptado leyes en favor de la población indígena, así como disposiciones penales para sancionar la discriminación. La Ley N° 4430 de 21 de mayo de 1968, reformada por la Ley N° 4466 de 19 de noviembre de 1969, tipifica como delito punible la negativa a permitir el ingreso de personas a asociaciones, centros de diversión, hoteles, clubes y centros privados de enseñanza por motivos de discriminación racial. La comisión del delito por primera vez enfrenta una pena de multa. La primera reincidencia se penará con el cierre del establecimiento por seis meses; la segunda con el cierre definitivo. Según el artículo 371 del Código Penal, los actos de discriminación realizados por personas que sean dirigentes o gerentes de instituciones públicas o privadas o de empresas industriales o comerciales serán sancionados en una primera vez con multa y las reincidencias, con la suspensión de cargos u oficios públicos por un período específico. Según el artículo 372 del Código Penal, se impondrá prisión a quienes dirigieren o formaren parte de organizaciones de carácter internacional dedicados a la trata de esclavos, mujeres o niños, el tráfico de drogas o realizaren actos de terrorismo o infringieren disposiciones previstas en los tratados suscritos por Costa Rica para proteger los derechos humanos. En el artículo 272 se estipula que se impondrá pena de privación de libertad a los miembros de organizaciones nacionales que promuevan la comisión de actos de discriminación racial. La apología de la comisión de actos discriminatorios o de personas condenadas por dichos actos será reprimida con penas de privación de libertad según el artículo 274 del Código Penal. La coautoría, la complicidad y la incitación a la comisión del delito se sancionan de acuerdo con otras disposiciones. En el artículo 387 se sanciona la incitación del odio contra una persona o institución en lugares públicos o por medio de la prensa u otros escritos.

25. Los afrocaribeños que se asentaron en Costa Rica desde el siglo XIX para participar en la construcción del ferrocarril y trabajar en el cultivo del banano han conservado su idioma y su cultura. No obstante, las campañas de alfabetización de los últimos 40 años han amenazado la enseñanza bilingüe en la provincia de Limón. El Estado invierte actualmente grandes sumas en un programa de educación bilingüe en todas las escuelas del país que favorece especialmente a la provincia de Limón, donde existe una mayor vinculación entre la cultura de los afrocostarricenses descendientes de jamaquinos con la cultura del Valle Central. Pese a que la población afrocostarricense se concentra en la zona del Caribe, muchos viven también en otras partes de Costa Rica.

26. La Sala Constitucional ha conocido algunos casos de denuncias de discriminación racial en contra de afrocostarricenses. En 1993, el Sr. Henry Jones Williams, maestro, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional alegando que había sido discriminado por el Director de ese

centro de enseñanza. La Sala declaró sin lugar el recurso por falta de pruebas respecto de una posible diferencia de trato. En 1995, la Sra. Carolyn Markland Francis, modelo, interpuso litigio contra el Sr. José Tabora Wilson porque, según sus afirmaciones, no le permitió participar en un espectáculo de modelaje por pertenecer a la raza negra. Observando que la demandante no se opuso a los argumentos presentados por la defensa, la Sala desestimó la demanda.

27. En 1998, la Sala Constitucional conoció de una demanda entablada por personas de color contra los propietarios de un salón de baile denominado "El Coyote" alegando que se les había negado el acceso por razones de seguridad y moral pública y no por razones de discriminación racial. El veredicto de la Sala se basó en el principio de que no es posible crear o establecer categorías que otorguen a las personas un trato diferente, contrario a la dignidad humana, por pertenecer o no a determinado grupo étnico, pues tal circunstancia deviene arbitraria e inconstitucional. En sus observaciones, el tribunal explicó por qué era inadmisibles el prejuicio y la discriminación racial e hizo referencia explícita a la Convención. Lamentablemente, la Sala se vio imposibilitada de dar lugar al recurso de amparo porque los demandantes y testigos no aportaron las pruebas solicitadas en reiteradas ocasiones para sustentar sus alegatos. No obstante, dictaminó que cuando un establecimiento se valiera de restricciones permisibles al derecho de admisión como pretexto para la discriminación racial o étnica, tales acciones devendrían antijurídicas. De manera que se sentó un precedente para casos posteriores.

28. Dos de los 57 miembros del Parlamento de Costa Rica son afrocostarricenses, además una mujer afrocostarricense ocupó el cargo de Ministra de Gobernación entre 1994 y 1998.

29. Pese a que la Defensoría de los Habitantes, establecida en 1992, no ha recibido denuncias de discriminación racial de los afrocostarricenses, ha atendido quejas de diversa índole planteadas por indígenas con referencia al derecho a la tierra, al derecho a la consulta, al acceso a las instituciones, al derecho a la salud, la educación y la libre determinación y a la falta de control sobre la venta de licores en los territorios indígenas.

30. Está en proceso de consulta el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas con miras a dar plena vigencia a las disposiciones de la Convención y al Convenio N° 169 de la OIT. En este proyecto de ley se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a reivindicar sus culturas, el derecho a administrar sus territorios, a elaborar su propio plan de desarrollo y a tomar decisiones que consideren convenientes a la luz de sus propias tradiciones y costumbres. En 1993, la Subcomisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica preparó un primer borrador de ese proyecto sobre el cual se celebraron consultas en 40 comunidades indígenas. Cada comunidad eligió un representante comunitario y en septiembre de 1997 se organizó el Foro Nacional de Culturas Indígenas, al que asistieron 39 representantes electos, para examinar la versión final del proyecto que fue remitido posteriormente a la Asamblea Legislativa.

31. El Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones señaló en su informe que los miembros de las comunidades indígenas venían bien preparados a las consultas y habían demostrado, incluso por medio de la oposición manifiesta de ciertos sectores de la población indígena, el interés que tenían en la nueva legislación sobre su situación. Pese a algunos intentos de miembros de determinadas instituciones que trabajan con las poblaciones indígenas de sabotear las

convocatorias, en ningún caso hubo que cancelar la consulta por falta de asistencia. El proyecto quedó pues aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa y actualmente espera su promulgación.

32. La Defensoría de los Habitantes registró una disminución significativa del número de quejas provenientes de las comunidades indígenas que atribuyó a la realización del proceso de consultas y a los esfuerzos realizados para darlo a conocer entre esas comunidades. Lamentablemente ciertas diferencias entre diversos grupos y asociaciones indígenas y entre instituciones nacionales respecto de qué grupos representan legítimamente a las poblaciones indígenas y a qué órgano le corresponde la conducción del proceso de consulta parecen haber afectado este proceso. Al parecer ciertas diferencias personales entre diversos líderes indígenas han surtido efectos negativos en el proceso de elaboración del proyecto. En cualquier caso hay que señalar que las consultas en relación con el proyecto de ley han sido una experiencia formativa y valiosa para todos los participantes, por lo que la Defensoría señaló recientemente la conveniencia de formar una comisión interinstitucional con la participación de representantes de las comunidades indígenas para elaborar un modelo de consulta aplicable a los distintos aspectos de la vida de los pueblos indígenas. Toda recomendación que haga el Comité al respecto se transmitirá a esas autoridades.

33. De ser aprobado este proyecto de ley se abandonaría el concepto tradicional de "reservas indígenas" en favor del de territorios indígenas inscritos a nombre de consejos directivos del territorio indígena, entidad representativa electa democráticamente por los habitantes de cada territorio. Según el proyecto, las tierras indígenas son inalienables, inembargables, imprescriptibles e intransferibles a personas no indígenas. Cualquier proyecto de desarrollo requerirá un proceso de consulta con los habitantes del territorio y cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales requerirá de aprobación legislativa y de un proceso de consulta con el consejo directivo pertinente. Los territorios gozarán de exención impositiva y se promoverá la recuperación de tierras que ocupen personas no indígenas en el territorio indígena.

34. En materia de salud, el proyecto reconoce el derecho de los pueblos indígenas a utilizar sus métodos de medicina tradicional, al tiempo que establece que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social deberán garantizar la igualdad de trato de la población indígena, entre otras cosas, para contratar personal capacitado lingüísticamente para atender a los indígenas, dar prioridad a los indígenas en la contratación y otorgar seguro social gratuito a todos los indígenas que lo soliciten.

35. Se creará un Departamento de Educación Indígena en el Ministerio de Educación Pública, a cargo de un indígena, que se ocupará de desarrollar programas para reforzar la cultura indígena y difundir su conocimiento al resto de la población. El proyecto de ley prevé la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua indígena en todos los niveles de la educación pública que se imparta en los territorios indígenas.

36. El proyecto de ley dispone que el Ministerio de la Vivienda asigne prioritariamente fondos para la construcción de viviendas en los territorios indígenas, en consulta con los consejos directivos y respetando las peculiaridades arquitectónicas y materiales de los pueblos indígenas. También establece la obligación de indemnizar todo daño que se cause a la ecología de

los territorios indígenas. En materia de administración de justicia, el proyecto pretende reconocer la aplicación del derecho consuetudinario indígena y promover su codificación.

37. Se dispone el establecimiento de un fondo nacional de desarrollo indígena para la realización de proyectos de desarrollo sostenible, financiar becas de capacitación, recuperar tierras indígenas en manos de poseedores no indígenas y administrar los consejos directivos. Por último, el Instituto Nacional Indígena sustituirá a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI). El proyecto de ley contiene medidas verdaderamente novedosas y cabe esperar de él resultados positivos.

38. Otro hecho positivo es la decisión adoptada por la Sala Constitucional de 1997 en el sentido de que la reducción por parte del Ministerio de Cultura del presupuesto de la CONAI constituye una infracción del Convenio 169 de la OIT, así como el programa de la Defensoría de los Habitantes dirigido a apoyar las iniciativas locales de las comunidades indígenas para solucionar problemas encaminados a impulsar una red de defensa de los derechos indígenas mediante la formación de líderes locales, sobre todo mujeres, que exijan la actuación y el cumplimiento por parte de todas las instituciones gubernamentales de las obligaciones relacionadas con las comunidades indígenas.

39. La labor del Departamento de Educación Indígena está comenzando a dar frutos. El número de escuelas en las comunidades indígenas aumentó de 119 en 1995 a 137, con una matrícula de 5.397 estudiantes. En materia de salud, en la actualidad funcionan ocho equipos básicos de atención integral en salud, además la Defensoría de los Habitantes ha recomendado que se implante un sistema integrado local de salud para coordinar las acciones de las autoridades sanitarias gubernamentales y las formas tradicionales en cada comunidad.

40. Para concluir, el orador informó al Comité de que la redacción del informe periódico había requerido consultas y coordinación intersectoriales, en las que participaron numerosas entidades. El informe se ha distribuido a las organizaciones no gubernamentales interesadas y se ha dado a conocer por Internet.

41. El Sr. YUTZIS (Relator del país) dice que el exhaustivo informe verbal podía haberse presentado con antelación. De hecho se trataba de un segundo informe y sería difícil analizarlo de inmediato. Al encomiar la larga tradición democrática de Costa Rica, señala que la Convención tiene precedencia respecto de las leyes internas y felicita al país por la legislación sobre la mujer y por el establecimiento de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y la Defensoría de los Habitantes. La firma por Costa Rica del Convenio N° 169 de la OIT creará un incentivo para seguir reflexionando sobre las cuestiones indígenas, asunto al que Costa Rica evidentemente atribuye suma importancia. La amnistía migratoria decretada en febrero de 1999 es un acontecimiento loable.

42. Entre los aspectos negativos figura la situación de los refugiados e inmigrantes que Costa Rica generosamente recibe, pero que no siempre es favorable, pese a que el país tiene suficiente experiencia en el tratamiento de esos grupos. Entre los problemas comunes figuran la discriminación en el empleo, la salud, la educación y la vivienda, mientras que con frecuencia se tilda a los inmigrantes de delincuentes. Los nicaragüenses parecen experimentar las mayores dificultades. No obstante, el orador reconoce que el Estado Parte

es consciente de lo que califica de "estado de indefensión al que se enfrentan los inmigrantes indocumentados" (párr. 16).

43. El orador hace referencia a los informes de Amnistía Internacional sobre presunta intimidación, incluso amenazas de muerte, contra una hondureña casada con un interrogador del servicio de inteligencia de Honduras en 1996, que las autoridades no adoptaron medidas para impedir, a raíz de lo cual la interesada tuvo que refugiarse en un país de Europa. Se pregunta si el Estado Parte puede proporcionar información al respecto.

44. En el período que se examina, la mano de obra inmigrante ha sido objeto de explotación por los latifundistas que producen caña de azúcar y cítricos (en el norte), café (en diversas regiones) y bananas (región del Atlántico). Algunas de las empresas del caso son transnacionales, lo que significa que el Estado debe, en cierta medida, ser consciente de lo que ocurre. ¿En qué medida esa demanda de mano de obra agrícola influye en la política de apertura a los inmigrantes que aplica Costa Rica? ¿Qué medidas especiales existen para proteger a los empleados de esos sectores? ¿Qué contribución aportan esos sectores a las soluciones estructurales de los problemas derivados de la llegada de inmigrantes? ¿Existe alguna política efectiva para prevenir la discriminación contra los inmigrantes; en caso afirmativo, en qué medida se ha dado a conocer y cuáles han sido los resultados? ¿Qué estrategias pone el Estado al alcance de los inmigrantes para que puedan organizarse y defender sus propios derechos?

45. Las últimas oleadas de inmigrantes, según se afirma, tienen problemas para obtener permiso de empleo y el orador se pregunta las medidas que se han adoptado en particular para ayudar a los nuevos inmigrantes procedentes de Colombia, Perú, Liberia, Sierra Leona y la Federación de Rusia. ¿Son ciertos los informes de que los centroamericanos tienen preferencia para obtener permisos de empleo? También se ha dicho que los cubanos tienen dificultades para lograr permisos de empleo y que los nicaragüenses han sido víctimas de la violencia y en ocasiones, en el caso de los indocumentados, de deportación.

46. El proyecto de ley sobre desarrollo autónomo de los pueblos indígenas tiene suma importancia. En el pasado se adoptó un criterio en cierta manera "integracionista" respecto de la aplicación de la ley a los pueblos indígenas. El debate en América Latina es sumamente álgido respecto del concepto de mestizaje, que parece ser utilizado para restar importancia a la existencia de comunidades indígenas. No obstante, esas comunidades son las más pobres y marginadas de Costa Rica y sus condiciones de vida son tan malas como las de cualquiera en los países más pobres de Centroamérica.

47. El uso de la palabra "indio" en el párrafo 21 del informe debe haber sido un descuido, ya que en la práctica los pueblos indígenas lo consideran un término racista. Además, la delegación parece tener una opinión más bien peyorativa de las comunidades indígenas cuando, en su exposición oral, achaca a las diferencias entre los dirigentes de grupo los defectos de algunos aspectos de las consultas en relación con el proyecto de ley sobre desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Otro caso en que se observa esa actitud es en el párrafo 22 del informe donde se explica que el problema de la tenencia de tierras es producto de "la debilidad interna de las comunidades indígenas, que no se habían podido defender por sí solas". Esto francamente contradice las referencias a la participación de los pueblos indígenas en las consultas sobre sus derechos. En los tiempos modernos, el problema ha sido de falta de recursos

y no de defensa física para asegurar un genuino traspaso de las reservas a las comunidades indígenas.

48. Pese a la demarcación jurídica de las reservas indígenas (párr. 23), las tierras sólo pasan a manos indígenas después de ser expropiadas a los propietarios no indígenas. ¿Qué porcentaje de las tierras declaradas como reservas con arreglo a la ley se encuentran efectivamente en manos indígenas? ¿Qué plazos estipula la ley para efectuar la expropiación a los propietarios no indígenas de esos territorios? ¿Cuántas familias indígenas que viven en las reservas carecen de tierras? ¿Cuántas familias indígenas viven fuera de las reservas y no poseen tierras en éstas o en otro lugar? ¿Qué disposiciones existen para la asignación de parcelas de terreno dentro de las reservas indígenas una vez expropiada la tierra y en qué medida controla el Estado esa asignación? Según datos de la CONAI, aproximadamente 50% de las tierras declaradas jurídicamente como pertenecientes a las reservas no se encuentran en manos indígenas. La cuestión de la tierra tiene suma importancia para los pueblos indígenas tanto para su subsistencia como para el mantenimiento de su identidad cultural. Según estimaciones de las organizaciones no gubernamentales, aproximadamente 50% de los indígenas en edad laboral no poseen tierras. El problema se agrava por un crecimiento de la población que equivale a que las tierras indígenas tengan que dividirse a perpetuidad en parcelas cada vez más pequeñas, lo que reduce su capacidad productiva. Según su interpretación, la distribución creciente de la tierra a los pueblos indígenas se logra subdividiendo la tierra que ya poseen y no proporcionándoles acceso a nuevas tierras dentro de las reservas que permanecen aún en manos no indígenas.

49. El orador destaca la declaración verbal relativa al carácter inalienable, imprescriptible e intransferible de esas tierras, pero pregunta cómo se ocupa el Estado del problema del acceso al crédito para los pueblos indígenas y señala que, dado que la posesión está amparada por un título colectivo no se puede vender, ni los propietarios indígenas pueden enajenarla de forma alguna, lo que equivale a que no les sirva de garantía para las transacciones de crédito. En la práctica, las poblaciones indígenas no tienen oportunidad de acceder al crédito ni tienen seguros para sus cosechas o productos, ya que las primas son demasiado elevadas para los pequeños productores. ¿Cuáles son los planes del Estado para prestar servicios de asesoramiento técnico en forma permanente que sistemáticamente beneficien a los productores indígenas? Los pueblos indígenas deberían tener acceso también a los tipos de prestaciones e incentivos que se otorgan a los agricultores que viven en zonas próximas a las reservas ya que todo parece indicar que no es el caso. ¿Qué ayuda o incentivos se ofrecen para la comercialización de sus productos? El rápido agotamiento de las tierras debido a las técnicas de corta y quema y la falta de opciones para una comercialización justa de sus productos agrícolas inhiben además el desarrollo de una economía de producción y perpetúa la economía de subsistencia.

50. Respecto al caso Talamanca, el Comité es consciente de las tensiones relacionadas con la prospección de petróleo. Según informes, las personas que atacaron a la comunidad indígena fueron arrestadas y llevadas ante los tribunales. ¿Cuál ha sido el fallo de los tribunales?

51. Con referencia al artículo 5 de la Convención, la salud de los 40.000 indígenas y la prestación de servicios de salud constituyen un motivo de preocupación. ¿Qué parte del presupuesto se invierte en estos servicios? ¿Cuántas clínicas existen? Todo parece indicar que algunas de ellas no se encuentran en zonas donde viven poblaciones indígenas y que el acceso se

dificulta para estas personas. Es más, el orador tiene informes de que en los últimos años los pocos centros de salud situados en territorios indígenas han sido cerrados; algunos se han creado en las afueras pero están mal dotados de equipo y con un mínimo de personal, que pocas veces incluye a indígenas, y que realiza visitas esporádicas. Los informes de las organizaciones no gubernamentales mencionan en particular enfermedades de las vías respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales, mordidas de serpiente y malnutrición entre los grupos étnicos cabécar, bribri, teribe, guaymí, hueta, maleku, chorotega y boruca que viven en 22 reservas. Hay muchos testigos presenciales de los grandes sufrimientos que padecen las comunidades indígenas.

52. El orador agradece la información oral proporcionada en relación con los esfuerzos para abordar la cuestión de las personas negras de Costa Rica que no figuraba en el informe. El Comité pide datos acerca de la situación social de la población negra, aunque no desea sobreestimar la cuestión dado que su presencia no es muy numerosa. No obstante, es vital ofrecer detalles no sólo de la situación jurídica en que éstos y otros grupos étnicos viven sino también la situación en la práctica a fin de ayudar al Comité a comprender el lugar que ocupan.

53. Respecto del caso planteado por personas de color de que se les negó el acceso a un salón de baile, pese a que el veredicto establece un importante precedente, el orador expresa preocupación por lo que significa el hecho de que los demandantes no pudieran aportar pruebas. ¿Es que no cooperaron con las autoridades? ¿Desconocían acaso cómo exponer el caso o tuvieron verdaderas dificultades para obtener ayuda legal? Sin prejuzgar la cuestión, el Comité desea saber por qué la Sala Constitucional no pudo obtener las pruebas. La atención a tanto detalle demuestra en qué medida el Comité toma en serio el informe del Estado y su aplicación de la Convención.

54. La Sra. SADIO ALI pregunta por qué, pese a la ley aprobada por el Gobierno en 1977 por la que se crean las reservas indígenas y se autorizan las medidas para preservar los idiomas en las culturas indígenas, sólo han sobrevivido 6 idiomas de los 12 grupos étnicos. La mayor parte de los territorios de muchas de las reservas parecen estar en manos de personas que no son indígenas y otros territorios de reservas se ven amenazados por la explotación minera y petrolera que han sido reprobadas por sucesivas enmiendas a la ley de 1977; ¿puede la delegación aclarar esta cuestión? La ratificación del Convenio N° 169 de la OIT y su situación jurídica interna ha consolidado el movimiento indígena y llevado a las demandas indígenas de que se actualicen las leyes que les atañen. La ley de 1977 prevé cambios en los derechos territoriales pero prácticamente no se ha aplicado, ya que contiene medidas inadecuadas respecto del desalojo, las debidas garantías procesales, etc. La oradora confía en que la reciente elección de un nuevo gobierno y una asamblea legislativa no constituya un revés para el proyecto de ley sobre desarrollo autónomo de los pueblos indígenas.

55. El Sr. de GOUTTES agradece la información actualizada proporcionada y el anuncio de nuevos proyectos que benefician en particular a los pueblos indígenas. Se observan varios acontecimientos positivos, en particular la declaración de Costa Rica en relación con el artículo 14 en el que se reconocen las comunicaciones individuales. El orador considera que muchas partes del informe son excepcionalmente francas, sobre todo las relativas a la discriminación contra los indígenas y los inmigrantes indocumentados y los insatisfactorios resultados de la educación y la formación de los pueblos indígenas.

56. La Defensoría de los Habitantes es una institución importante, pero hace falta información acerca del número de denuncias de discriminación étnica o racial que se han señalado a la atención de esa oficina. ¿Existe algún motivo real para la creencia popular de que los costarricenses son étnicamente diferentes de los demás centroamericanos (párr. 10)? ¿Se propone la evaluación y examen de la actual política de migración darle más amplitud o hacerla más restrictiva (párr. 17)?

57. La legislación mencionada en los párrafos 20 a 90 parece abarcar los requisitos del artículo 4 de la Convención, pero ¿constituyen la proliferación de ideas racistas y la pertenencia a las organizaciones racistas delitos punibles según el Código Penal? El Comité necesita saber en qué medida la legislación interna es compatible con la Convención.

58. La información sobre los diversos recursos (párrs. 131 a 169) es demasiado general. El orador lamenta también que haya pocos ejemplos de juicios y condenas, ya que los únicos juicios a que se hace mención concreta en los párrafos 90 y 91 tuvieron resultados dudosos. El orador agradecería más información sobre otros veredictos.

59. El Sr. VALENCIA RODRÍGUEZ, refiriéndose a la interpretación del artículo 33 de la Constitución, según el cual las diferencias en el trato a los efectos jurídicos no deben ser arbitrarias sino basadas en consideraciones de racionalidad, pregunta si existen otras distinciones jurídicamente admisibles que no sean las del ejemplo del párrafo 88 del informe. Felicita al Gobierno por las medidas para eliminar el resentimiento y los prejuicios contra los centenares de miles de refugiados y desplazados de otros países permitiéndoles adquirir voluntariamente la condición de residentes temporales o permanentes (párr. 13). ¿Cómo ha funcionado este programa y cuáles son sus perspectivas futuras? Todo parece indicar que la situación de los inmigrantes ilegales es precaria y que son objeto de discriminación por parte del resto de la población, incluidas las autoridades. Este aspecto hay que destacarlo de manera que se puedan fortalecer los esfuerzos que se realizan actualmente. Los indocumentados y los posibles inmigrantes deberían tal vez estar mejor informados acerca de los requisitos de entrada legal y de sus derechos fundamentales y posibles recursos en caso de que tengan que legalizar su situación.

60. El problema de los pueblos indígenas que representa el 1% de la población total ha sido evidentemente y por largo tiempo, cuestión que preocupa al Gobierno de Costa Rica, como se demuestra en la promulgación de diversas leyes y el establecimiento de diversos órganos desde 1939, entre los que cabe destacar la CONAI y la Ley indígena N° 6162 de 1977. No obstante sigue siendo necesario que se preste atención directa a la aplicación de la ley a fin de eliminar las deficiencias que aún subsisten. Felicita a Costa Rica por ratificar los instrumentos internacionales, incluido el Convenio N° 169 de la OIT, y las medidas adoptadas en las esferas de la salud y la educación. La legislación ha sido lenta para encontrar el enfoque correcto pero los resultados alcanzados en la educación parecen positivos, aunque es menester seguir realizando esfuerzos. ¿Existen suficientes escuelas para los alumnos indígenas? ¿Cumplen éstos las "expectativas" de las comunidades?

61. En los párrafos 80 y siguientes del informe se da a entender que las disposiciones del Código Penal, en particular el artículo 371, cumplen parcialmente los requisitos del apartado a) del artículo 4, pero el orador confía en que el Gobierno informe al Comité de todas las disposiciones de la

legislación interna cuyo propósito es cumplir a cabalidad las obligaciones contraídas en relación con el artículo 4 y que la legislación mencionada por la delegación figure en el próximo informe de manera que el Comité pueda examinarla en detalle. ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de la Ley N° 4430 de 1968 sobre la admisión de personas de diferentes razas en los lugares públicos o privados (párr. 89)? ¿Se podría contar con más información sobre casos de violaciones?

62. La información sobre la inscripción de los pueblos indígenas en el registro civil es instructiva en lo que atañe al artículo 5, pero el orador confía en que en el próximo informe se ofrezcan más detalles acerca de la aplicación de otros derechos previstos en ese artículo. Respecto del artículo 6, el orador pregunta si los recursos que tienen a su alcance las posibles víctimas de discriminación racial, incluida la Sala Constitucional, el recurso de amparo, el hábeas corpus y la inconstitucionalidad, se han aplicado efectivamente en lo que atañe a los casos de discriminación racial. Por último confía en que la falta de información sobre la aplicación del artículo 7 se subsane en el próximo informe.

63. El Sr. BANTON dice que el informe presentado por escrito contiene mucha información que no interesa a la Convención y, por consiguiente, distrae la atención de la falta de información vital. El informe demuestra que Costa Rica ha elaborado bien sus leyes, pero no cuán eficaces son éstas en la práctica; otros miembros han señalado algunos de los defectos evidentes. El orador confía en que en el próximo informe quede bien explicado cómo logra Costa Rica proporcionar la protección que prometió a sus ciudadanos al ratificar la Convención.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.